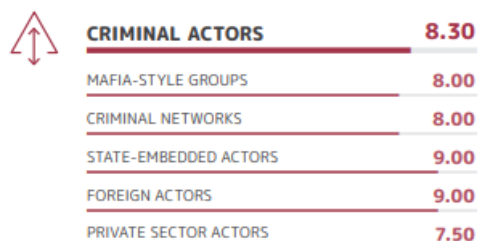
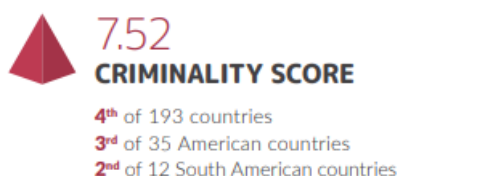


EL ESTADO ACTUAL DEL CRIMEN ORGANIZADO EN PARAGUAY

Carlos Peris

En septiembre de 2023 se publicó el índice sobre el estado del crimen organizado a nivel mundial. Este documento fue elaborado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con fondos del gobierno de los Estados Unidos y del Instituto de Seguridad (INTERPOL-UE). El material, se halla disponible en <http://ocindex.net>



Los datos concernientes a Paraguay son preocupantes, ya que entre los 193 países evaluados, la nación se posicionó en el cuarto lugar en lo que respecta a actividades ilícitas y la presencia de grupos criminales transnacionales. En comparación con la medición del índice anterior en 2021, se observó un aumento de 0.82 puntos, pasando de 6.70 a 7.52.

Con respecto a los mercados ilegales, el tráfico de drogas fue el que más significancia adquirió. El documento afirma que el Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y, en años recientes, ha aumentado incluso su producción mediante la pasta base de dicha sustancia. De hecho, la complejización del mercado de la droga se nota en el accionar de los traficantes, mismos que están utilizando cada vez más rutas aéreas y marítimas para eludir las restricciones terrestres de transporte. La logística del movimiento de cocaína en Paraguay involucra a diversos actores, incluidos trabajadores agrícolas, propietarios de fincas, agentes de policía, pilotos y elites políticas.



Con respecto a la marihuana, Paraguay es el mayor productor ilegal de cannabis en Sudamérica, y la mayoría de esta droga se trafica a Brasil. Las elites locales, con el apoyo de actores estatales, controlan el mercado de la marihuana y tienen vínculos con funcionarios militares e incluso del poder ejecutivo. Grupos criminales extranjeros también han extendido su control sobre el tráfico de marihuana en Paraguay. Las comunidades en áreas rurales ven la marihuana como una fuente legítima de ingresos, y hay informes de comunidades indígenas que alquilan sus tierras a pandillas brasileñas para cultivar cannabis.

Ante este panorama, el informe sentencia que los mercados criminales en Paraguay están fuertemente influenciados y facilitados por actores vinculados al Estado, que van desde funcionarios de seguridad de bajo nivel hasta de élite. Estos agentes no solo facilitan las actividades criminales, sino que también crean obstáculos para enjuiciar a los delincuentes y a actores de estilo mafioso.

El índice sentencia:

La corrupción está tan arraigada en la sociedad que es una constante independientemente del gobierno, y es común que los agentes de policía y los funcionarios de los servicios estatales exijan sobornos. Además, la economía ilegal es fundamental para los partidos políticos en el país, ya que se informa que muchos contrabandistas y traficantes de drogas ricos utilizan sus ganancias para financiarlos.

A lo dicho, además, hay que agregar que la pandemia de COVID-19 ha aumentado la demanda de bienes de contrabando, lo que ha tenido un impacto social y económico notable en el país. El comercio ilegal de tabaco en Paraguay está dominado por actores del sector privado, a quienes se les acusa de evasión de impuestos e influencia política. También tienen personas influyentes en el gobierno que han sido utilizadas para perseguir a quienes incautan sus envíos ilegales.

La dirección política y la gobernabilidad de Paraguay siguen siendo motivo de preocupación. Se ha acusado a actores de los dos principales partidos políticos de formar un 'pacto de impunidad' para evitar investigaciones por denuncias de corrupción. Los miembros del gabinete actual han enfrentado críticas por su falta de eficacia y experiencia en el servicio de la unidad anticorrupción.

Aunque Paraguay ha tomado medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno, incluida la creación de un sitio web de transparencia y una nueva Ley de Contratación Pública, el país aún cuenta con un marco legal deficiente para el acceso a la información y un alto nivel de percepción de corrupción. Las lagunas legales, en particular en el financiamiento de campañas políticas, y las agencias de supervisión limitadas para reaccionar en lugar de prevenir, contribuyen a la corrupción en todos los



niveles del Estado. Además, la falta de seguridad jurídica y la falta de independencia del poder judicial resultan en altos niveles de impunidad, discontinuidad de políticas y proyectos, y un débil desarrollo de una cultura ética.

Paraguay tiene una larga historia de ser un país de alto riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aunque se han aprobado nuevas regulaciones, los esfuerzos del gobierno parecen estar más orientados a cumplir con los estándares internacionales que a lograr resultados efectivos.

Los delincuentes están utilizando cada vez más al Paraguay para blanquear dinero ilícito a través de la adquisición de bienes raíces, ranchos ganaderos y otros activos, y el Estado parece carecer de la voluntad política para combatir este delito de manera efectiva. El área de la Triple Frontera compartida con Brasil y Argentina, por ejemplo, es un punto crucial para el lavado de dinero y una fuente de financiamiento para redes criminales y terroristas.

El entorno regulatorio económico en Paraguay está plagado de delincuencia organizada, como lo demuestran casos de lavado de dinero, acusaciones de tráfico de armas contra contratistas estatales y la falta de transparencia en las empresas de energía. El aumento de bienes de contrabando está socavando los sectores económicos formales, ya que estos pagan impuestos y aranceles, y no pueden competir con las redes de contrabando.